

ZAMARRIPA

➤ A la inseguridad pública se suma la incertidumbre económica. Se requieren acciones conjuntas que vean a largo plazo, lejos de las eternas canonjías.

TOLVANERA

¿Otro pacto?

ROBERTO ZAMARRIPA

Las cifras confirman el apesadumbrado ambiente de Navidad y de cierre de año: según INEGI, la tasa de desocupación en noviembre llegó a 4.5 por ciento de la población económicamente activa, el nivel más alto desde 2000 (*Reforma*, 20/12/2008).

Eso supone que unos 2 millones de mexicanos en edad de trabajar no tienen empleo.

El desempleo mexicano del 2008 tiene características particulares: afecta a distintos integrantes de las familias, a los jóvenes, los de edad madura e incluso de tercera edad. Toca a los preparados y a los no formados; a los capacitados y a los no veles; a los de educación profesional y a los analfabetos.

Si bien el desempleo pega ligeramente más a los hombres que a las mujeres, atraviesa a familias y comunidades; devora expectativas en el ámbito de la pequeña y la mediana empresa y genera enormes incertidumbres en grandes corporaciones.

A la inseguridad pública -sus temores, sicosis y desazones- se agrega ahora la inseguridad económica con impactos sociales severos.

De manera drástica e inmediata comienzan a cambiar los hábitos de compra, las prácticas sociales, la adquisición de bienes y consumo de alimentos que más allá de las inevitables restricciones de las próximas fiestas auguran un 2009 flaco.

Las políticas que se consideraron populistas y fueron acremente criticadas hace unos años ahora resultan tablitas de salvación de muchas familias. Las pensiones y ayudas oficiales (instaladas en el Distrito Federal e imitadas por otros gobiernos estatales), producto de esas políticas criticadas, se han convertido en el sostén económico de familias. Quién iba a decirlo, los ancianos sostienen a sus descendientes víctimas de la crisis en una dramática cara de la debacle del 2008.

Los líderes de cámaras empresariales urgieron a los líderes del Congreso a tomar medidas emergentes ante la situación; el presidente Felipe Calderón ha llamado a los sectores productivos a defender el empleo y en el Congreso se ha convocado a un foro para definir una política anticrisis.

La preocupación gubernamental, empresarial y parlamentaria es sin duda buena. Apenas se está a tiempo para preparar una reacción y por los retos desde luego que merece una respuesta conjunta de todos los factores de poder económico y político.

El problema de la historia de pactos y acuerdos entre políticos y empresarios es que siempre tienden a la modelación de entornos conservadores que piensan más en el corto plazo y no en las oportunidades de transformaciones de fondo que afecten las causas de la postración econó-



mica y el rezago social.

Si hay preocupación real de los jerarcas de la economía y de la política por diseñar y aplicar un programa de combate a la crisis tendría que pensarse en una serie de medidas concatenadas que detonen inversión pública, generen controles sociales para evitar uso faccioso del gasto y obliguen a sectores que detentan privilegios a ceder en sus voracidades.

En la época de Miguel de la Madrid, hace cinco lustros, se pusieron de moda los pactos de concertación firmados por líderes empresariales y caciques sindicales. Lo extraordinario del asunto es que el desempleo masivo afectó a las bases de los sindicatos que controlaban los líderes firmantes; erosionó la planta laboral; alteró de manera radical la vida en las comunidades rurales (la emigración se convirtió en la fuga hacia adelante en medio de la crisis), pero no supuso

una afectación directa a los privilegios de los jerarcas gremiales.

Hoy en día, los líderes del sindicato petrolero son tan fuertes o más que *La Quina*, deciden y abusan en materia de política petrolera tanto como el ex líder sindical, y trafican con la misma o mayor impunidad que sus antecesores. La libertad y democracia sindicales son asignaturas pendientes y bien podrían abordarse ahora en el marco de las urgencias económicas.

Igual sucederá con el mercado de la informalidad. Muchos de los desempleados acudirán al autoempleo o buscarán lugar en la venta informal. Ahí tendrán que cuadrarse con los jefes de las calles que deciden quién y bajo qué condiciones puede vender informalmente.

La crisis se convierte en una gran oportunidad de enriquecimiento y de reposicionamiento político de las mafias sindicales y también las del ambulante. Muchos pactos se han firmado. Y en muchas ocasiones han sido los mismos de siempre quienes los signan. Esas rúbricas no auguran éxito sino cobertura de privilegios. Eso de que Carlos Romero Deschamps firme un pacto por la seguridad y la legalidad o que Elba Esther Gordillo firme un convenio por las libertades de contratación en el sistema educativo son convocatorias a la nulidad de los acuerdos.

Debe cambiar la modalidad del acuerdo político y provocar una participación distinta de la sociedad. Si los firmantes son entes que defienden canonjías poco éxito puede augurarse. Deben ser acuerdos de la sociedad y sus gobiernos, no de jefes de mafias y sus socios.

Correo electrónico: tolvanera06@yahoo.com.mx